COMENTARIO AL DECRETO 179/2019, DE 19 DE NOVIEMBRE, SOBRE NORMALIZACIÓN DEL USO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS LENGUAS OFICIALES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES DE EUSKADI.

Introducción.

En el BOPV nº 223 de 22 de noviembre de 2019 se publicó el Decreto del Gobierno Vasco 179/2019, de 19 de noviembre, a instancias del Departamento de Gobernanza y de Autogobierno y del Departamento de Cultura y Política Lingüística. Este Decreto que entró en vigor el día siguiente de su publicación se configura como un Decreto de desarrollo de la Ley de Instituciones locales de Euskadi y de la Ley básica de normalización del uso del euskera.

Es preciso recordar que la ley 2/2016 de 17 de abril de instituciones locales de Euskadi en su título primero relativo a los objetos y principios de la ley incorpora los artículos 6 y 7 relativos al euskera como lengua oficial de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y a las competencias de las entidades locales y de los municipios respecto al uso del euskera.

A continuación voy a proceder a analizar el contenido del Decreto para finalizar con una valoración del mismo desde la perspectiva municipal.

Análisis descriptivo del contenido del Decreto.

El Decreto se compone de un preámbulo y siete capítulos en los que se integran 59 artículos; cinco disposiciones adicionales; una disposición transitoria y dos disposiciones finales.

El capítulo I se refiere a las disposiciones generales y en el mismo se integran los artículos 1 a 7 del Decreto.

El artículo 1 se refiere al objeto y define como objeto del Decreto la regulación de los usos sobre normalización del uso institucional y administrativo del euskera y del castellano en las entidades locales y demás

entidades que conforman el sector público local de Euskadi, así como garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas en sus relaciones con las administraciones locales. Tiene por tanto un objeto doble el Decreto, uniendo dentro de la misma normativa dos ámbitos diferentes, que son la regulación del uso del euskera y el castellano como lenguas en la administración local y garantizar los derechos de los ciudadanos a utilizar cualquiera de ambas lenguas. En todo momento y en toda la regulación del Decreto son dos realidades que van estrechamente unidas y que son límites una de la otra. Dentro del artículo 1 se marcan los objetivos principales del Decreto que buscan garantizar el uso oficial del euskera y del castellano y a partir de ahí fomentar el uso del euskera como lengua de servicio de trabajo, y amparar y fomentar el uso del euskera por parte de los vecinos y vecinas, alcanzar la igualdad real y promover el uso del euskera en todos los ámbitos de la vida de las entidades locales.

El artículo 2 recoge el ámbito subjetivo de la aplicación que abarca a los municipios, a todo tipo de entidades locales también a las entidades que conforman el sector público local como los organismos autónomos locales y las sociedades mercantiles locales o fundaciones de carácter local. Recoge también un avance, que posteriormente se concretará relativo a que los criterios de uso lingüístico regulados en el Decreto son de aplicación a las empresas o entidades que gestionan los servicios públicos municipales, así como también son de aplicación a las relaciones de las personas beneficiarias de subvenciones municipales y al público al que se dirigen las actividades subvencionadas siempre que el uso de la lengua resulte relevante. También se aplican esos criterios a las personas beneficiarias del uso privativo y del uso común especial del dominio público en las relaciones que se mantengan como tal por ciudadanos y ciudadanas.

El artículo 3 se refiere al ámbito territorial de aplicación siendo el mismo las entidades locales y demás entidades que conforman el sector público local del ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, además de también a las relaciones entre dichas entidades y entidades locales en cuyos

territorios el euskera es lengua de uso siempre y cuando se den los oportunos convenios.

El artículo 4 recoge unas definiciones de los términos que entiende más importantes y que se incorporan en el Decreto, recogiendo las siguientes definiciones:

- Planes de normalización que son los documentos que recogen la formulación de la política lingüística de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de normalización lingüística de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, del Decreto 86/1997 que regula el proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en el propio Decreto.
- Espacios vitales del euskera o “arnasguneak”, que se definen como zonas geográficas o socio funcionales en el que el porcentaje de personas con conocimientos del euskera supera el 80%, siendo lengua de uso general y normal en las relaciones sociales. En esta definición las zonas geográficas no están ligadas directamente a términos municipales con lo cual cabría entender la posibilidad de que dentro de un municipio y en su término municipal pudiera haber una zona geográfica que constituyera un espacio vital del euskera y también se concibe como tal zonas socio-funcionales, concepto que nada tiene que ver con ámbitos territoriales y que al parecer tiene más que ver con la utilización en ámbitos de trabajo o de relación. Teniendo en cuenta el efecto que tiene la determinación de considerar a una zona geográfica o socio-funcional espacio vital del euskera en relación a la necesidad de someter planes o proyectos al procedimiento de evaluación de impacto lingüístico hubiera sido conveniente clarificar qué significa zona socio-funcional.

A este respecto es importante trasladar lo que el Dictamen 153/2019 de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi sobre el Decreto indica : 141.- Según la definición señalada en el artículo 4 (“espacios o vitales del euskera arnasguneak: zonas geográficas o sociofuncionales en las que el porcentaje de personas con conocimiento del euskera supera el 80 %, siendo lengua de uso normal y general en las relaciones sociales, sin perjuicio del conocimiento y garantía

del derecho de uso del castellano”), sugiere diversas interpretaciones posibles. Solo acudiendo a una de las memorias del procedimiento se puede encontrar la explicación de la versión que se incorporaba finalmente al proyecto, aceptando una propuesta realizada por uno de los agentes intervinientes:

- *Bat egiten dugu proposamenaren atzean dagoen kezkarekin; hots, arnasmune izaerara heltzen ez diren beste eremu batzuk ere babes premia dutela. Hori horrela, eta kontuan harturik eremu horiek udalerrri mailaren azpikoak izan daitezkeela, bi kategoria baino gehiago egin daitezkeela eta harreman eremu geografikoak ez direnak ere aintzat hartzeko modukoak izan daitezkeela egokiagoa iruditzen zaigu udalen eskuetan jartzea beraien menpeko eremuen definizioa eta ahalbidetzea, ezaugarrien arabera, babes maila anitzak ezartzea.*

142.- Comprendiendo que la deliberada indefinición tiene el propósito de deferir a la decisión municipal la diversidad de formas orgánicas o funcionales, y límites geográficos o sociológicos, que pueden acogerse bajo el concepto, nada impide aceptarlo con el margen amplio con que se contempla en el precepto.

- Impacto lingüístico que lo define como la alteración de la situación socio-lingüística previo provocado por un proyecto o un plan. Evaluación del impacto lingüístico que es el conjunto de actuaciones que proceden del procedimiento de aprobación de planes, o de autorización de proyectos o en su caso respecto a la actividad administrativa de control de los proyectos sometidos a declaración responsable o comunicación a través de los cuales se analizan los posibles efectos sobre la normalización del uso del euskera.
- Plan que se define como un conjunto de estratégicas, directrices y propuestas que no son ejecutables directamente sino que se ejecutan a través de uno o varios proyectos. Proyecto se define como una actuación que consiste en la ejecución o explotación de una obra, una construcción o instalación que pueda afectar la situación socio lingüística de los municipios, es decir, estamos hablando de una actuación sobre algo físico.
- Modificación sustancial de un plan o de un proyecto son modificaciones que se realizan en cualquier de ambos documentos.
- Estudio lingüístico que es un estudio que elaboran los servicios técnicos municipales y que debe ser parte integrante del plan o

proyecto y su función es identificar, describir y evaluar los posibles efectos sobre la situación socio lingüística del municipio que pudieran derivarse de la aplicación del plan o proyecto, así como plantear unas alternativas y medidas compensatorias proporcionadas que tengan en cuenta los objetivos y ámbito territorial del plan o proyecto a fin de prevenir o minimizar los efectos adversos sobre la normalización del uso del euskera.

- Persona promotora que es cualquier persona física o jurídica, pública o privada que pretenda elaborar un plan o realizar un proyecto.
- Informe de evaluación del impacto lingüístico, que es un informe preceptivo elaborado por los servicios técnicos municipales que concluye la evaluación de impacto lingüístico y evalúa la integración de los aspectos lingüísticos en la propuesta final del plan o proyecto.
- Topónimo que es el nombre propio con que se designa a una entidad geográfica.
- Alónimo que es cada uno de los nombres diferentes que designan un mismo elemento geográfico.
- Elemento genérico, que es un término común que se puede añadir al topónimo y que explica de manera general la naturaleza de la entidad geográfica.
- Elemento específico que es un elemento imprescindible del topónimo, simple o compuesto.
- Entidad geográfica, que es cualquier elemento del paisaje tanto natural como artificial que tenga o pueda tener nombre.
- Nomenclátor geográfico oficial que es el catálogo ordenando de topónimos y entidades geográficas con información sobre los mismos y versión lingüística auténtica de los documentos que es la lengua en la que ha sido redactado un documento en origen.

Estas son las definiciones que se recogen en el artículo 4. Como se observa existe una serie de documentos de mayor o menor alcance que han de tenerse en cuenta cuando alguien pretenda formular un plan o realizar un proyecto. En primer lugar, debe atender a lo que determine el plan de

normalización que es el que recoge la formulación de la política lingüística de la entidad, y es el documento que se supone rector y que define cuáles van a ser las actuaciones de esa entidad local en el ámbito de sus capacidades y competencias lingüísticas en orden a la normalización del uso del euskera y castellano en las entidades locales y a garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía. A continuación tiene que formular un estudio lingüístico que se configura como parte integrante del plan o proyecto y por tanto se supone que se presenta con el mismo y que identifica y describe los posibles efectos que puedan resultar de la aplicación de ese plan o proyecto y plantea algunas medidas para minimizarlos. Esa documentación es la que se analiza en el informe de impacto lingüístico que es el informe preceptivo que elaboran los servicios técnicos municipales y que evalúa la integración de los aspectos lingüísticos en la propuesta final del plan o proyecto.

Es llamativo que se asigne a los servicios técnicos municipales, independientemente de que el promotor sea público o privado, la elaboración del estudio lingüístico que como parte integrante del plan o proyecto ha de presentarse para su análisis a los mismos servicios técnicos municipales a los que también se les asigna la labor de realizar el informe de evaluación del impacto lingüístico de dicho proyecto.

El artículo 5 se refiere a los principios rectores del Decreto recogándose un total de diez principios rectores que son los siguientes:

1. Uso normal y general del euskera como lengua de servicio y trabajo sin que de dicho uso se pueda entender ninguna limitación respecto de la otra lengua oficial.
2. Garantía de los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas;
3. Autonomía lingüística local, pero que debe ejercerse teniendo en cuenta los criterios de planificación y regulación del uso del euskera emanados de las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma;
4. Principio de auto organización;
5. Principio de no discriminación por razón de la lengua oficial que se utilice o desee utilizar;

6. Principio de acción positiva, es decir que las entidades locales adoptarán medidas dirigidas a eliminar los obstáculos que limitan el uso del euskera y que la adopción de medidas especiales destinadas a promover la igualdad entre los hablantes de las distintas lenguas oficiales y orientadas a tener en cuenta las situaciones peculiares de los que están en una situación más desfavorecida no se considera un acto de discriminación.
7. Acción resuelta a favor de la lengua propia, fomento de la diversidad lingüística garantizando los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas, lo que significa un uso progresivo y creciente del euskera en sus actividades internas, actuaciones de amparo, protección y promoción y fomento del uso del euskera en todos los ámbitos de su competencia y también facilitar el fomento del empleo oral y escrito del euskera en la vida pública y privada del ámbito de su competencia;
8. Principio de eficacia y eficiencia;
9. Principio de proporcionalidad dirigido a que las medidas que se propongan sean idóneas y adecuadas para el fin legítimo perseguido y que no existan otras medidas menos lesivas para la consecución de tal fin con igual eficacia;
10. Planificación, es decir, que el sector público local de Euskadi debe responder a una actuación planificada con el fin de normalizar el uso institucional y social del euskera.

El artículo 6 se refiere a los derechos lingüísticos de la ciudadana y del ciudadano recogiendo el derecho a expresarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales cuando se relacionan con la administración y a ser atendidos en cualquiera de las dos lenguas oficiales y a utilizar libremente en su calidad de personas administradas cualquiera de las dos lenguas oficiales en sus relaciones y actos públicos y privados en todos los ámbitos de la vida municipal.

El artículo 7, y último, de este capítulo se refiere a la normativa académica y uso no discriminatorio del lenguaje remitiéndose a que debe de tenerse en cuenta la normativa académica del euskera de conformidad a las normas emanadas por Euskaltzaindia, aunque se posibilite el uso formal en el ámbito exclusivamente local si resulta necesario de las características dialectales. Finaliza con el mandato de un uso no sexista del lenguaje.

El capítulo II se refiere a las competencias de los municipios en materia de lengua e instrumentos para desarrollarla y comprende los artículos 8 a 11.

El artículo 8 recoge el reconocimiento de la competencia de las entidades locales en materia lingüística y se indica que dicha competencia se ejercerá a través de las funciones o facultades de carácter normativo o de ordenación, de planificación, de programación, de fomento, de gestión, y de ejecución.

El artículo 9 se refiere a la competencia “ad intra”, destacando en ella la referencia a los espacios vitales del euskera, se supone en el ámbito socio funcional. Asimismo se recoge también como competencia “ad intra” promover la capacitación oral y escrita en ambas lenguas por parte de las personas electas.

El artículo 10 regula la competencia “ad extra” indicándose que el fomento y dinamización del euskera se realizará tanto en las prestaciones que se dirijan a los vecinos y vecinas como en la actividad de fomento.

El artículo 11 se refiere a las determinación e instrumentos recogiendo que los municipios de acuerdo con su situación socio-lingüística contemplarán aspectos relativos a criterios de uso oral y escrito en el funcionamiento interno de los órganos de gobierno municipal, de los servicios municipales,

en las relaciones orales y escritas con las personas administradas, formatos lingüísticos en documentos estandarizados, tratamiento del euskera en actos públicos, relaciones entre administraciones, publicaciones, traducciones, interpretación, etc. Indica asimismo que los instrumentos en los que se plasmará la política lingüística serán los planes de normalización lingüística y en las ordenanzas de normalización lingüística, que son disposiciones de carácter general con vocación de permanencia que establecen derechos y obligaciones en materia lingüística dirigida a los vecinos y vecinas, y en los reglamentos de normalización lingüística que son también disposiciones de carácter general que regulan la organización y el funcionamiento lingüístico de la entidad local y la lengua en la prestación de los servicios públicos y los planes de gestión que son también disposiciones de carácter general que desarrollan algún aspecto del plan de normalización lingüística, con un período temporal inferior a este.

A los instrumentos antes indicados el Decreto los califica como disposiciones de carácter general, pero realmente dicha calificación será adecuada en función de su contenido ya que en muchas ocasiones los planes únicamente recogen manifestaciones de voluntad que no generan efectos jurídicos exigibles y que para su ejecución requieren que se apruebe otras disposiciones de carácter general o se dicten actos administrativos que aterrizan las voluntades en manifestaciones jurídicas generadoras de derechos y obligaciones. Este análisis de cada documento determina el procedimiento y órgano competente para su aprobación y sin perjuicio de otros documentos el Reglamento de normalización lingüística así como a los Planes de gestión en función del contenido concreto que incorporen podrían ser aprobados en los Ayuntamientos por Decreto o Instrucción de la Alcaldía de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional primera de la Ley de Instituciones locales de Euskadi.

El plan de normalización lingüística es el documento referente de la actuación municipal, ha de ajustarse a las previsiones de la normativa reguladora vigente en cada momento, suelen ser habitualmente planes quinquenales y cuyos criterios fundamentales vienen marcados por las instituciones competentes de la Comunidad Autónoma de Euskadi. (Decreto 86/1997 que regula el proceso de normalización del uso del

euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi). Dicho artículo finaliza indicando los instrumentos a los que los municipios pueden recurrir para el ejercicio de las competencias y son instrumentos de colaboración funcional como convenios de cooperación, instrumentos de colaboración orgánica, como la participación en mancomunidades, consorcios, etc., instrumentos propios de la actividad de fomento como ayudas y subvenciones; títulos habilitantes para el uso del dominio público e instrumentos de contratación administrativa.

El capítulo III se denomina uso institucional y administrativos y está dividido en cuatro secciones abarcando los artículos 12 al 38.

La sección primera que se denomina Cuestiones Generales se inicia con el artículo 12 titulado regulación y planificación del uso de las lenguas oficiales que insiste en el mandato a las entidades locales de planificar y regular de acuerdo con su situación sociolingüística la utilización del euskera como lengua de servicio y lengua de trabajo.

El artículo 13 titulado uso normal y general indica que el euskera y el castellano son lenguas oficiales y por tanto lenguas de uso normal y general en las entidades locales.

El artículo 14 ratifica la validez jurídica de las actuaciones realizadas en una lengua oficial cualquiera que sea aquella.

El artículo 15 recoge el derecho a escoger la lengua de relación por parte de la ciudadanía y el correlativo deber de las entidades locales de atenderles en la lengua elegida sin que por el uso de la lengua pueda derivarse ningún tipo de discriminación a las personas en razón de la lengua oficial que desean utilizar.

El artículo 16 se refiere a la imagen institucional que indica que los elementos de entidad corporativa se han de redactar al menos en euskera, recogiendo también en un apartado diferente que los rótulos indicadores de interiores y exteriores de oficinas y otras instalaciones de las entidades locales y de las entidades que forman el sector público pueden figurar únicamente en euskera cuando la grafía sea similar, cuando el rótulo en euskera no dé lugar a confusión o cuando venga acompañado de un pictograma. Finaliza indicando que cuando se utilizan ambas lenguas oficiales en la imagen institucional de las entidades locales el euskera ocupará un lugar prioritario.

La sección segunda se refiere a la lengua de trabajo y comprende los artículos 17 a 21.

El artículo 17 se refiere a las actuaciones internas. Se ratifica en el concepto de lengua de trabajo del euskera y de la validez de sus actuaciones. Se indica que los planes de normalización lingüística determinarán qué servicios serán designados “unidades administrativas en euskera” indicándose que en esos servicios será el euskera la lengua de relación tanto oral como escrita. Indica también que las relaciones internas de carácter administrativo, que no exijan notificación ni publicación, pueden realizarse o redactarse en euskera, garantizando siempre, en todo caso, los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas.

El artículo 18 relativo a la documentación recoge una relación de documentos que podrán ser redactados en euskera de acuerdo con lo que al respecto disponga la normativa aprobada por cada entidad local, redacción que coincide con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley de instituciones locales de Euskadi con una ampliación ya que incorpora también en la relación al resto de la documentación municipal indicando que puede ser redactado en euskera pero siempre con el límite de que si la utilización del euskera o castellano para la redacción de dicha documentación pudiera lesionar los derechos de algún miembro de la

entidad local que pudiera alegar válidamente el desconocimiento de la lengua utilizada, se le proporcionará una traducción a la otra lengua oficial. Es interesante indicar que el desconocimiento del euskera o del castellano ha de ser un desconocimiento que se pueda alegar válidamente, tal como se recoge en el artículo 6.2 de la ley de instituciones locales de Euskadi. La validez de la alegación del desconocimiento entiendo que no puede predicarse de alguien que manifieste desconocer el castellano ya que existe un mandato constitucional de conocer la lengua castellana pero por otro lado también es cierto que sería cuestionable alegar desconocimiento del euskera para un corporativo que haya cursado la educación obligatoria en centros docentes del País Vasco en los años siguientes a la implantación del euskera como obligatorio en el currículum educativo. No obstante frente a esta situación la solución habitual y aconsejable es la utilización de elementos de traducción. Este artículo tiene un último inciso importante que manifiesta de manera imperativa que la documentación interna municipal será creada en una lengua oficial, euskara o castellano, sin perjuicio de la aplicación posterior de los criterios lingüísticos relativos a las comunicaciones y notificaciones a las personas interesadas, es decir, busca eliminar la traducción sistemáticamente del documento a las dos lenguas oficiales y teniendo en cuenta que hay que conjugar el idioma que se utilice con los derechos de la ciudadanía y de los corporativos en los términos que se viene estableciendo será la realidad sociolingüística de cada municipio la que irá determinando el sentido que pueda tener o qué documentos deben ser traducidos a la lengua en la que no han sido generados.

El artículo 19 habla del funcionamiento de los órganos y recoge que las sesiones de los órganos colegiados de las entidades locales podrán desarrollarse en lengua vasca cuando todas las personas intervinientes la conozcan regulándose también la situación de personas que son capaces de entender la lengua aunque no de expresarse y se les posibilita, lógicamente, que puedan expresarse en lengua castellana. Recoge este punto también la obligación de las entidades locales de promover la capacitación y la comprensión oral y escrita de ambas lenguas por parte de las personas electas. Recoge también una mención relativa a las sesiones públicas de las

entidades locales, en la que se dice que la ciudadanía puede expresarse en cualquiera de las lenguas oficiales en la Comunidad Autónoma, sin que pueda exigírseles la traducción o explicación alguna en la lengua que no hubieran elegido y la traducción a otro idioma oficial, de ser precisa, será realizada por la entidad local.

El artículo 20 se refiere a los perfiles lingüísticos y su criterio de uso. En este apartado el párrafo primero se remite al a lo previsto en el Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi y recoge también que las entidades locales desarrollarán medidas para euskaldunizar y formar en euskera a su personal. El apartado segundo indica que las personas que hubieran acreditado un perfil lingüístico asignado a su plaza (se supone que al puesto) se le reconoce capacidad suficiente para el desarrollo de las funciones propias de su puesto por lo que utilizarán el euskera como lengua de trabajo o lengua de servicio de acuerdo con los criterios que establezca la entidad y en función de las necesidades del servicio. Insiste en el punto tercero que los que tuvieran acreditado el perfil 3 o 4 trabajarán en euskera tanto oralmente como por escrito de acuerdo con lo que al respecto establezca la entidad. Finalmente el artículo termina con un punto que recoge el derecho del personal al servicio de las entidades locales a recibir formación en euskera. Este artículo genera unas posibilidades de implantación obligatoria del uso del euskera en su labor a los empleados públicos que tiene acreditado los perfiles lingüísticos, especialmente el 3 y el 4, si así lo establece la entidad.

El artículo 21 se titula racionalización de la traducción y dicho artículo, en consonancia con lo indicado anteriormente, lo que busca es racionalizar y evitar la utilización extensiva de la traducción.

El artículo 22 relativo al material de ofimática indica que dicho material tiene que ser adaptado para su funcionamiento también en euskera sin perjuicio de ser utilizado también en castellano y por tanto las entidades locales tienen que adaptar las aplicaciones informáticas para el ejercicio del derecho de opción lingüística de los ciudadanos y ciudadanas y también de su propio personal.

El artículo 23 relativo a las redes de internet e intranet manifiesta que ambas deben de ser posible de ser consultadas en euskera y castellano cuando sus contenidos hayan sido elaborados para informar con carácter general, mientras que en el resto de los supuestos se ofrecerán en su lengua de origen. Manifiesta también que el acceso inicial de los contenidos web de las entidades locales por defecto se realizarán por la página de euskera y que las direcciones URL de las páginas web deberán contener palabras en euskera finalizando con la indicación de que debe de posibilitarse la realización de trámites a través de internet o intranet tanto en euskera como en castellano.

La sección tercera se refiere a lengua de servicio. Se inicia con el artículo 24 que se titula lengua de los procedimientos y de los expedientes administrativos. Indica que los expedientes administrativos iniciados a través de una única persona en euskera o de varias si todas ellas utilizan esta lengua será el euskera la lengua de tramitación del procedimiento. En el resto de los procedimientos la entidad local tiene que determinar la lengua de tramitación en aplicación de su propia normativa y de acuerdo con la legislación vigente procurando el mutuo acuerdo de las partes que concurran. En relación a los procedimientos administrativos iniciados de oficio cada entidad local determina los criterios de uso de las lenguas. En los casos de concurrencia de varias personas interesadas y con discrepancia en cuanto a la lengua a utilizar en el procedimiento, el mismo se tramitará en euskera y castellano de acuerdo con lo que disponga la normativa aprobada por la entidad local si bien los documentos o testimonios dirigidos a las personas se expedirán en la lengua elegida por las mismas.

El artículo 25 se refiere a comunicaciones y notificaciones y se dice que se garantizará el uso de la lengua elegida por cada uno. Realiza un mandato a las entidades en el sentido de prestar atención a las circunstancias que revele la lengua que deseen utilizar las personas físicas y jurídicas que a ella se dirijan y para ello debe posibilitarse formularios en ambos idiomas. Nada se indica para los supuestos de procedimientos iniciados de oficio o se dirijan a personas que no hayan instado una solicitud previa ante la administración en ese expediente.

El artículo 26 se refiere a las comunicaciones generales indicando que las comunicaciones deberán ser claras y comprensibles y cuando el destinatario sea un colectivo que pudiera requerir un tratamiento lingüístico especial la entidad local se esforzará en adecuar el lenguaje estilo y formato a las características de dichos colectivos para garantizar así la máxima eficacia comunicativa. Llama la atención que en este apartado nada se refiere a los idiomas a utilizar aunque estimo que desconociéndose los destinatarios deberá atenderse a la situación sociolingüística del municipio a fin de publicar en el idioma o idiomas oficiales en función de la realidad del mismo.

El artículo 27 se refiere a la atención a la ciudadanía, indicándose que el personal de las entidades locales que están en atención directa deberá dirigirse al ciudadano en primera instancia en euskera para luego continuar en la lengua que el ciudadano elija y a la inversa si algún ciudadano se dirige en euskera a un empleado que desconoce dicha lengua este empleado debe recabar ayuda de otro empleado o empleada bilingüe, porque en todo caso hay que prestar el servicio en la lengua elegida por el ciudadano o ciudadana tanto en la atención presencial como telefónica. Recoge también criterios para mensajes automáticos, relaciones escritas, etc., en todo caso respetándose la lengua que manifieste el ciudadano y en caso de no conocer dando una prevalencia al euskera, indicando finalmente que los

documentos administrativos sin persona destinataria determinada se realizarán en las dos lenguas oficiales, es decir, en este caso no se atiende a la realidad sociolingüística del municipio porque, lógicamente, no se conocen personas destinatarias determinadas.

El artículo 28 se refiere a modelos normalizados que han de existir en dos versiones en euskera o en castellano y si son en formato bilingüe el texto de lengua vasca tendrá una posición preferente. Si existen modelos diferentes debe expresarse en cada modelo que existen a disposición de la ciudadanía los mismos impresos en la otra lengua oficial.

El artículo 29 relativo a las copias auténticas manifiesta que las copias auténticas realizadas por la entidad local tienen validez en las diferentes administraciones públicas cualquiera que sea la lengua oficial en que estuvieran expedidas pero, no obstante, si deben surtir efectos en Comunidades Autónomas en que el euskera no es oficial deben acompañarlas de la traducción correspondiente al castellano indicando que se trata de una traducción del original en euskera.

El artículo 30 se refiere al registro electrónico general, indicando que debe ser capaz de ser utilizado tanto en euskera como en castellano para la recogida y procesamiento de datos sin que por ello tengan que perder funcionalidad respecto a las funciones asignadas por la normativa vigente a los registros. Indica asimismo que los certificados que se expidan se redactarán en euskera o castellano a petición de la persona interesada cualquiera que sea la lengua oficial en la que conste en los asientos.

El artículo 31 se refiere a sistemas automatizados indicando que los mismos deben garantizar el derecho de opción de la lengua oficial de las personas interesadas y que el euskera será la primera lengua de respuesta en dichos diseños y la primera opción de consulta.

El artículo 32 se refiere a la publicidad activa y el derecho de acceso a la información municipal. Respecto a la publicidad activa indica que cuando la información está relacionada con el fomento del euskera puede ser difundida únicamente en esta lengua. El principio general es que se garantice el acceso en ambas lenguas oficiales a la información de carácter general. En relación al acceso de las personas interesadas a la documentación generada en un procedimiento administrativo concreto en los términos establecidos por la legislación en materia de transparencia indica que dicha documentación puede ser consultada en la lengua original en la que se haya creado y no obstante ello se facilitarán a las personas interesadas el acceso a los mecanismos electrónicos de traducción necesarios para asegurar la debida accesibilidad y transparencia. Finalmente en dicho artículo se reconoce el derecho de acceso a la información pública en las versiones lingüísticas auténticas de los documentos producidos por las entidades locales. De este precepto se deriva que cuando alguien acceda utilizando la legislación sobre transparencia a un documento y ese documento está redactado en euskera o castellano no hay por qué realizar la traducción del mismo sino en todo caso remitirle a una página web donde puede realizar la traducción como puede ser, por ejemplo, la página web del traductor neuronal.

El artículo 33 se titula publicaciones divulgativas e informativas indicando que se redactarán o emitirán, por lo menos, en euskera cuando vengan relacionadas con el fomento y la normalización del uso del euskera. En el resto de los casos se supone que también pueden ser redactados o emitidos en castellano además de euskera. Se pide a las entidades locales que presten atención especial a eslóganes de campañas y a la publicidad relativa a la promoción exterior de las entidades locales, recogiendo el Decreto que se realizará en la lengua que resulte adecuada a tal fin, pudiendo recurrirse a lenguas no oficiales. Finalmente se fija como criterio para determinar la lengua a emplear en las comunicaciones divulgativas el factor de

conocimiento de ambas lenguas oficiales por parte de las personas receptoras.

El artículo 34 referido a escrituras públicas manifiesta que las entidades locales impulsarán que la redacción de las escrituras públicas y su inscripción en los registros correspondientes se realice al menos en euskera.

El artículo 35 se refiere a la utilización común, especial y privativa del dominio público indicándose que se promoverá la normalización del uso del euskera en el paisaje lingüístico del dominio público y a tal fin, los títulos habilitantes para la utilización común y especial del dominio público incorporarán las cláusulas necesarias para que la información escrita dirigida a las personas consumidoras y usuarias, y los avisos de seguridad estén redactados o sean comunicados también en euskera indicando, asimismo, que de acuerdo con los criterios que establezca cada municipio la lengua de uso normal y general en la actividad, pública o privada, desarrollada en instalaciones municipales podrá ser principalmente el euskera, pero en todo caso debiendo garantizarse el cumplimiento de la normativa relativa a la oficialidad del euskera y del castellano.

La sección cuarta se refiere a la contratación administrativa y convenios de colaboración. El artículo 36 se refiere a los contratos públicos e indica que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.8 de la Ley de Instituciones locales de Euskadi los contratos administrativos suscritos por las entidades locales incluirán las cláusulas que sean precisas para garantizar a los ciudadanos y ciudadanas el derecho a recibir las actividades o los servicios en los que medie un contrato, en condiciones lingüísticas equivalentes a las que sean exigibles a las entidades contratantes, así como el cumplimiento de la regulación de la doble oficialidad lingüística del euskera y del castellano. A este respecto hay que indicar que realmente lo que dispone el artículo 7.8 de la Ley de Instituciones locales de Euskadi no es lo que viene

regulado en el Decreto ya que la Ley en dicho artículo se limita en cuanto a la garantía de los derechos lingüísticos de los ciudadanos y el cumplimiento de la regulación de la oficialidad lingüística del euskera y castellano a aquellos servicios que se estén prestando por los modos de gestión indirecta, es decir, un ámbito bastante más reducido que el de la contratación administrativa ya que hay modos de gestión directa en los que existen contratistas que tienen relación directa con la ciudadanía como pueden ser los contratos de servicios. Indica también este precepto que los pliegos de condiciones deben de estar en las dos lenguas oficiales y que en los pliegos se establecerá en cada caso, atendiendo al objeto del contrato los requerimientos lingüísticos correspondientes, requerimientos que estarán vinculados a las condiciones de ejecución de cada contrato y deben garantizar que los ciudadanos y ciudadanas sean atendidas en la lengua oficial que escojan y que se preste el servicio en condiciones lingüísticas equivalentes a las que sea exigible a la administración titular del servicio. Indica también que las condiciones lingüísticas de ejecución del contrato se basarán en los siguientes principios: el principio de proporcionalidad; el de estar ligadas a los cometidos a llevar a cabo mediante el contrato y que puedan ser acreditadas por la empresa tanto con medios propios como, en su caso, con medios externos. También prevé este artículo que se podrá recoger en las condiciones de ejecución del contrato la regulación relativa a la lengua que se empleará en las relaciones entre la entidad contratante y la persona adjudicataria. En relación a los contratos que impliquen un trato directo con los ciudadanos y ciudadanas debe garantizarse que la adjudicataria está obligada a prestar el servicio de acuerdo con la normativa de la propia entidad local relativa a su actividad lingüística y deberá adscribir a los distintos puestos de trabajo personas que cuenten con la capacitación lingüística exigida para desempeñar sus funciones lo que se determinará en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, por ello se requerirá a la persona licitadora que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que identifique a las personas trabajadoras designadas para ocupar los distintos puestos de trabajo necesarios para la ejecución del contrato con indicación de los niveles de competencia lingüística acompañando en su caso los documentos

acreditativos correspondientes indicando que corresponde al órgano de contratación velar por el cumplimiento de los requisitos lingüísticos.

El artículo 37 se refiere a los convenios e indica que pueden formalizarse para impulsar el aprendizaje y uso del euskera y además que todos los convenios que suscriban las entidades locales y demás entidades que conforman el sector público local de Euskadi con personas físicas o jurídicas se redactarán por lo menos en euskera.

La sección quinta y última se refiere a actividades de fomento. El artículo 38 es el relativo a las ayudas y subvenciones públicas donde se manifiesta la posibilidad de incorporar el uso de las lenguas oficiales en la actividad de fomento siempre que sea un factor relevante en el objeto de la actividad subvencionada. Indica que la persona o entidad beneficiaria aplicará criterios lingüísticos en base al principio de proporcionalidad y que estén ligadas el euskera a las actividades subvencionadas y el cumplimiento de las obligaciones lingüísticas impuestas debe ser acreditados por la persona beneficiaria pudiendo utilizar tanto con medios propios como ajenos. Finaliza indicando que en el marco de la actividad subvencionada se dará preferencia al euskera en las comunicaciones o publicaciones.

El capítulo IV es el relativo a las relaciones institucionales y se desarrolla en los artículos 39 a 41. El artículo 39 se refiere a documentos originales en euskera e indica que la documentación producida en euskera cuando se dirija a otras entidades que conforman el sector público local de Euskadi u otras administraciones públicas radicadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi se cursarán en euskera. Asimismo, cuando las resoluciones, actas y acuerdos se redacten en esta lengua las copias o extractos a la Administración autonómica y a la Administración del Estado radicada en la Comunidad Autónoma de Euskadi, en cumplimiento de la legislación básica de régimen local se remitirán en euskera. Cuando esta documentación se remita a otras administraciones no comprendidas en el ámbito geográfico

de la Comunidad Autónoma de Euskadi se remitirá en castellano acompañada del texto original en euskera indicando que se trata de una traducción del original en euskera. Finalmente manifiesta que aquellos servicios designados como unidades administrativas en euskera utilizarán la lengua vasca en sus relaciones escritas con dichas administraciones.

El artículo 40 se titula promoción del uso del euskera en las relaciones institucionales manifestando la necesidad del mandato de promover el uso del euskera en las relaciones interinstitucionales e indicando que se utilizará el euskera cuando se trate de una respuesta dada a un escrito o requerimiento redactado en esta lengua.

El artículo 41 se refiere a la comunicación institucional y recoge que las entidades locales impulsarán e incentivarán el uso del euskera en las intervenciones públicas y que los actos públicos y comparencias ante los medios de comunicación se realizarán por lo menos en euskera cuando se trata de la actividad de comunicación institucional.

El capítulo V se refiere a la toponimia municipal y señalización de vías y servicios y abarca los artículos 42 a 48. El artículo 42 denominado competencia recoge la competencia de un municipio respecto a establecer la nomenclatura oficial y la regulación del procedimiento y aprobación de los topónimos y lugares geográficos en su ámbito territorial. Recoge que el procedimiento de modificación del nombre de las entidades locales se regulará por la normativa foral correspondiente.

El artículo 43 denominado principios rectores en el ámbito de toponimia municipal y señalización de vías públicas recoge unos principios rectores que son los siguientes:

- a) Se respetará en todo caso el origen euskaldun o castellano de los topónimos.

- b) Se garantizará el principio de univocidad
- c) Se garantizará el principio de claridad y precisión.
- d) Se garantizará el principio de organización rectora en la oficialización de los topónimos.

El artículo 44 trata de las reglas de obligatoria observancia en el establecimiento de los topónimos recogiendo reglas para los supuestos de más de una denominación dándose carta de naturaleza a las recomendaciones y normas dictadas por Euskaltzaindia, así como que se dará prioridad a la perspectiva de género. Finalmente indica que en el caso que hubiera que oficializar nuevas denominaciones o espacios geográficos determinados se dará prioridad a las denominaciones en euskera, cuando dichos nuevos topónimos contengan algún nombre de persona, se dará prioridad a los nombres de mujer y será necesario recibir el correspondiente dictamen de Euskaltzaindia indicando que en todo caso se desecharán las denominaciones artificiosas, exóticas o comerciales, así como nombres en lenguas extranjeras.

El artículo 45, titulado reglas básicas de procedimiento recoge el proceso de alteración de la denominación de las entidades locales remitiéndolo a la normativa foral y detallando en dicho artículo las reglas básicas del procedimiento a seguir para que los municipios aprueben los topónimos y lugares geográficos en su ámbito territorial. El expediente se inicia por acuerdo favorable del órgano competente y posteriormente una información pública, dictamen de Euskaltzaindia y una aprobación definitiva. A continuación se posibilita la posibilidad de que por el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de normalización lingüística pueda formular oposición respecto a algunas cuestiones del expediente para una vez finalizado el expediente se inscriba en el nomenclátor geográfico oficial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El artículo 46 se refiere a la aprobación y oficialización de los topónimos de competencia del Gobierno Vasco dictando un procedimiento específico para el propio Gobierno.

El artículo 47 se refiere al nomenclátor geográfico oficial de la Comunidad Autónoma del País Vasco indicando que se crea el mismo como registro público adscrito al departamento con competencia en materia de normalización lingüística del Gobierno Vasco en el que se inscribirán los topónimos oficiales de Euskadi.

El artículo 48 referido a la señalización o rotulación indica que la señalización de carreteras, caminos, barrios, puentes, túneles, etc., que dependan de las entidades locales y de los servicios que estas gestionen por concesión se realizarán al menos en euskera además de la rotulación en castellano cuando corresponda, de acuerdo con la normativa de tráfico y seguridad vial. Cabe únicamente la rotulación en euskera cuando el mensaje sea fácilmente comprensible en dicho idioma y en los rótulos bilingües la primera versión será en euskera.

El capítulo VI se refiere a la evaluación del impacto lingüístico de planes y proyectos y abarca los artículos 49 a 57.

El artículo 49 se titula objetivo y principios de la evaluación. En su primer párrafo determina que debe realizarse una valoración de impacto lingüístico en los procedimientos de aprobación de planes y autorización o habilitación de los proyectos de competencia municipal que pudieran afectar negativamente a la situación socio-lingüística del municipio. Este párrafo limita la valoración del impacto lingüístico a planes o proyectos de competencia municipal. La interpretación de esta limitación es que se refiere a aquellos planes y proyectos cuya aprobación corresponde realizar al municipio. Esta interpretación encajaría prácticamente con todos los supuestos recogidos en el artículo 50, al que este artículo se remite para indicar a que planes o proyectos afecta, excepto los planes generales de ordenación urbana, normas subsidiarias de planeamiento, planes parciales o especiales que no en todos los casos corresponde a todos los

Ayuntamientos su aprobación definitiva. Consecuentemente esta limitación deja fuera de cualquier tipo de evaluación de impacto lingüístico a planes y proyectos que no corresponde su aprobación definitiva al ayuntamiento sino a otras entidades como pueden ser las Diputaciones Forales o el Gobierno Vasco, pese a que pudieran tener impacto sobre la situación socio-lingüística existente en los municipios afectados. Esta redacción del Decreto limita las previsiones de la Ley de Instituciones locales de Euskadi que en su artículo 7.7 no recoge una limitación a los proyectos de competencia municipal sino que se refiere a procedimientos de aprobación de proyectos o planes que pudieran afectar a la situación socio-lingüística de los municipios, lo que estimo más razonable teniendo en cuenta la finalidad que se persigue con las evaluaciones de impacto lingüístico.

Recoge los objetivos y principios de la evaluación de impacto lingüístico. Los objetivos son:

- La integración de los aspectos lingüísticos y de la normalización del uso del euskera en la elaboración y aprobación, autorización o habilitación de planes y proyectos que puedan afectar a la situación socio lingüística de los municipios;
- El análisis y la toma en consideración de las alternativas;
- El diseño de las medidas que permitan corregir los efectos adversos sobre la normalización del uso del euskera.

Los principios en los que se basará la evaluación del impacto lingüístico son:

- Prevención,
- Integración en el procedimiento sustantivo de aprobación de planes o autorización de proyectos,
- La calidad técnica de elaboración,
- La participación de las personas interesadas y el público en general,
- La adecuación de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias al impacto lingüístico y proporcionalidad entre el impacto lingüístico y los medios para minimizarlo,
- La confidencialidad, en especial en relación a los datos que aporten los promotores,
- El deber de colaboración de las personas promotoras,
- El impulso a la normalización del uso del euskera

- El impulso al desarrollo social de los municipios garantizando un modelo lingüísticamente sostenible.

El artículo 50 titulado planes y proyectos objetos de evaluación, detalla qué planes y proyectos deben ser objeto de evaluación de impacto lingüístico cuando tengan efectos en el uso del euskera. Relaciona los planes generales de ordenación urbana, los planes de compatibilización de planeamiento general, planes de sectorización, normas subsidiarias de planeamiento, planes parciales, planes especiales de ordenación urbana, y planes de turismo. Respecto a los proyectos relaciona los proyectos de construcción de grandes superficies comerciales y los proyectos de polígonos industriales y parques tecnológicos. Esta lista no es cerrada cuando se trate de planes y proyectos que puedan afectar al uso del euskera dentro de espacios vitales o “arnasgunea” ya que en ese supuesto deben evaluarse todos los planes o proyectos que puedan afectar al uso del euskera.

El artículo 51 titulado supuestos excluidos de la evaluación se recogen como excluidos las modificaciones no sustanciales de planes o proyectos, la aprobación de planes y autorización o habilitación de proyectos con nulo impacto lingüístico, los proyectos que deriven de un plan que hubiera sido sometido previamente a evaluación lingüística indicando que en esos supuestos deberá hacerse constar en el expediente un informe que recoja tal extremo.

El artículo 52 se refiere a la evaluación del impacto lingüístico en planes y proyectos sometidos a aprobación o autorización y a los proyectos sometidos a declaración responsable o comunicación. Este artículo distingue los dos supuestos, es decir, aquel que requiere de una autorización previa para la realización del plan o proyecto de aquel que el proyecto se puede iniciar debido a que lo que se requiere es una declaración responsable o una comunicación previa. Respecto a los primeros la evaluación de impacto lingüístico debe realizarse durante la

tramitación sustantiva del procedimiento, es decir, previamente a la aprobación que dé por finalizado el procedimiento, y respecto a los sometidos a declaración responsable o comunicación, que estimo que en todo caso solo pueden darse en las zonas de espacios vitales o “arnasgunea” porque en el resto de las zonas la tipología de planes y proyectos que requieren de evaluación de impacto lingüístico no pueden ser sometidos al procedimiento de declaración responsable o comunicación previa, en estos casos, una vez realizada la evaluación del impacto lingüístico se comunicarán a la persona interesada las medidas que durante la ejecución e implantación así como la fase de funcionamiento debería de aplicar.

El artículo 53 se denomina determinación del alcance del estudio lingüístico, y recoge que a la hora de analizar si un plan o proyecto tiene efectos sobre el uso del euskera ha de tenerse en cuenta los siguientes indicadores:

- a) modificaciones en la población del municipio;
- b) modificaciones en el número de visitantes del municipio y
- c) afecciones de otro tipo en la situación sociolingüística del municipio.

Corresponde a los servicios técnico municipales una vez analizados los aspectos mencionados remitir al órgano municipal competente para la aprobación sustantiva del plan o proyecto un informe relativo al alcance del estudio lingüístico en el cual si entienden que no se produce ningún impacto lingüístico relevante propondrán no realizar el estudio de impacto lingüístico y en caso contrario cumplirán con la necesidad de elaborar el estudio de impacto lingüístico.

El artículo 54 se refiere a la elaboración del estudio de impacto lingüístico. Determina que este estudio será realizado por los servicios técnicos municipales y detalla los aspectos que deben analizarse como mínimo y que fundamentalmente se refieren a la descripción general del plan o proyecto

y previsiones en el tiempo sobre su desarrollo, al cálculo de la intensidad del impacto lingüístico, el análisis de los aspectos esenciales, las medidas compensatorias y las medidas correctoras.

El artículo 55 se refiere a la información pública, consultas a personas interesadas y trámite de audiencia. En este precepto se indica que durante el período de información pública del procedimiento sustantivo de aprobación del plan o proyecto, se someterá al mismo trámite el estudio de impacto lingüístico. Durante ese trámite de información pública, el municipio consultará al departamento del Gobierno Vasco competente y a las personas interesadas y las consultas se realizarán mediante notificación que contenga al menos la siguiente información: el estudio de impacto lingüístico, o el lugar donde puede ser consultado; el órgano al que se deben remitir los informes y evaluaciones y las formas de acceso a la información relevante sobre el plan o el proyecto. El Gobierno Vasco dispone de un plazo de 30 días hábiles para emitir el informe y las personas interesadas disponen del mismo plazo para formular las alegaciones, plazos que comienzan a contar desde la recepción de la notificación. A continuación y en el plazo máximo de diez días hábiles desde la finalización de los trámites de información pública y consultas la entidad local procederá a dar audiencia a la persona promotora si fuera privada y a las demás personas interesadas si las hubiera, remitiéndoles los informes y alegaciones recibidas para su conocimiento. El artículo no recoge el plazo de audiencia a otorgar a la persona promotora y las demás personas interesadas por lo que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas dicho plazo no será inferior a 10 días hábiles ni superior a 15 días hábiles.

El artículo 56 regula el informe de evaluación del impacto lingüístico. Indica que el informe de impacto lingüístico tiene que tener al menos los siguientes aspectos:

- a. La identificación de la persona promotora del plan o proyecto y la descripción del mismo.
- b. El resumen del resultado del trámite de información pública y de las consultas al departamento del Gobierno Vasco y a las personas interesadas, y cómo se han tenido en consideración.
- c. El resumen del análisis técnico realizado por el órgano municipal encargado de la evaluación de impacto lingüístico.
- d. Si proceden, las condiciones que debieran establecerse y las medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos adversos sobre la normalización del uso del euskera.
- e. El sistema de seguimiento y si procediera, la creación de una comisión de seguimiento.

El plazo que se prevé para la elaboración del informe de evaluación del impacto lingüístico el plazo de un mes a partir de la finalización de los plazos de consulta y, en todo caso, el informe de evaluación ha de incorporarse al procedimiento sustantivo antes de que este concluya. Es preciso recalcar que este informe se configura como preceptivo en el procedimiento y expresamente así se recoge en el preámbulo del Decreto.

La regulación recogida supone tener que acompañar los plazos de información pública de los planes o proyectos sometidos al estudio de impacto con la propia normativa de este Decreto que regula en el artículo anterior un plazo de 30 días hábiles, al que hay que añadir otro plazo de 10 días hábiles para dar audiencia a la persona promotora si fuera privada y a las demás personas interesadas si las hubiera y posteriormente el plazo de un mes para elaborar el informe de evaluación del impacto lingüístico con lo cual en cómputos naturales y sin contar el tiempo que hay que invertir en notificar a las entidades interesadas los resultados de alegaciones al plan o proyecto supone un plazo mínimo de tres meses para disponer del informe de evaluación del impacto lingüístico que como recoge el artículo debe incorporarse al procedimiento sustantivo antes que este concluya .

El artículo 57 se refiere a la efectividad del informe de evaluación del impacto lingüístico indicando que el acto administrativo con el que el municipio apruebe o autorice el plan o proyecto deberá incorporar los aspectos contenidos en el informe de impacto lingüístico relativos a las condiciones que deben establecerse y medidas que hayan de adoptarse y el sistema de seguimiento de las mismas. Se indica que dicho informe de evaluación de impacto lingüístico no puede ser objeto de recursos sin perjuicio de los recursos que puedan proceder contra el acto que se aprueba o autoriza el plan o proyecto.

El capítulo VII es el relativo al impulso institucional y comprende los artículos 58 y 59.

El artículo 58 titulado medidas de fomento recoge entre otras la posibilidad de que las entidades locales puedan establecer ayudas directas de acuerdo con la normativa básica de subvenciones, así como bonificaciones y exenciones fiscales para los actos relacionados con la normalización y el uso de las lenguas sin que respecto a esta última posibilidad se haga referencia alguna a la normativa tributaria de aplicación.

El artículo 59 relativo a las medidas de planificación recoge que las entidades locales se han de dotar de instrumentos de planificación lingüística general consistentes en programas periodificados, a fin de establecer los objetivos y medidas más convenientes en cada momento y evaluar sus resultados. La elaboración de dichos instrumentos debe ser concertada con los distintos agentes y colectivos implicados y debe tenerse en cuenta los principios de participación, simplificación y eficacia. En el Decreto la concertación se refiere a la elaboración de los instrumentos de planificación lingüística general, que hay que suponer que son los planes de normalización definidos en el artículo 4 del Decreto, ya que de no ser así constituirían un nuevo documento no definido en el Decreto, y en mi opinión repetitivo de los planes de normalización. La redacción del artículo con la expresión “la elaboración debe ser concertada” abre la duda acerca de si para realizar un instrumento de planificación, del alcance de la concertación en la elaboración de dicho instrumento de planificación que

debe estar además ajustado a las directrices que emanen de las instituciones competentes del Gobierno Vasco. Estimo que teniendo en cuenta la competencia asignada a la entidad local por la Ley de Instituciones locales de Euskadi, que debe ejercerse con aplicación del principio de autoorganización, la concertación exigida no alcanza a que exija un documento acordado sino que es suficiente con que se contraste con la opinión de dichos agentes.

La Disposición Adicional primera relativa a la incidencia presupuestaria recoge por un lado que la aplicación de este Decreto no va a suponer más gasto para el Gobierno Vasco y por otro, que la incidencia presupuestaria que pudiera tener, que es evidente que va a tener, debe ser atendida por los medios personales y materiales de las entidades locales.

La Disposición Adicional segunda se refiere a los topónimos registrados con anterioridad indicando que se considerarán inscritos en el Nomenclátor geográfico oficial de la Comunidad Autónoma del País Vasco que se crea con el presente Decreto.

La Disposición Adicional tercera titulada metodología y formación para la realización de las evaluaciones de impacto lingüístico recoge que el Gobierno Vasco desarrollará una metodología de evaluación, así como las herramientas informáticas correspondientes, y las pondrá a disposición de las entidades locales. Indica también que los municipios deberán hacer pública la metodología que emplearán para la evaluación del impacto lingüístico de los planes y programas y que ese sentido podrán acordar su adhesión a la ofertada por el órgano competente en materia de normalización lingüística del Gobierno Vasco, o si es propia, deberá ser aprobada y publicada en los portales webs.

La Disposición Adicional cuarta se refiere a la evaluación del impacto lingüístico de planes y proyectos que no son de competencia municipal y cuya aprobación corresponde a otras administraciones públicas. Indica que en el procedimiento de aprobación de dichos planes y proyectos el órgano municipal competente que tiene atribuida la evaluación de planes y proyectos analizará su impacto lingüístico y propondrá las condiciones y medidas para prevenir y corregir los posibles impactos negativos de los mismos.

La Disposición Adicional quinta referida al sector público recoge la prevención de si se modifican las entidades que integran el sector público local, más allá de las enumeradas en propio Decreto, se entenderán incorporadas para las determinaciones del Decreto.

La Disposición Transitoria titulada aplicación progresiva recoge que las prescripciones relativas a la normalización lingüística de los programas informáticos, registro electrónico, publicidad activa y contratación pública se aplicarán de forma progresiva, en atención a la capacidad de las entidades locales pero que dichas prescripciones deberán estar vigentes en el plazo máximo de tres años desde la entrada en vigor del Decreto, es decir, para el 23 de noviembre de 2022.

La Disposición Final primera se refiere a la estructura y organización del Nomenclátor geográfico oficial de la Comunidad Autónoma del País Vasco indicando que la misma se realizará por Orden de la persona titular del Departamento competente en materia de política lingüística.

La Disposición Final segunda recoge que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín oficial del País Vasco, es decir el día 23 de noviembre de 2020.

Valoración.

El Decreto supone un desarrollo completo de la normativa a aplicar por las entidades locales y demás entes incluidos dentro de su ámbito de aplicación en orden a la ejecución de las competencias que de manera expresa la Ley de Instituciones locales de Euskadi les asigna en el ámbito de la normalización lingüística y más concretamente en la normalización del uso del euskera. El Decreto, fundamentalmente en el capítulo VI, llega a un nivel de detalle procedimental que en mi opinión roza el concepto de autonomía local, recogido en el artículo 9 de la Ley de Instituciones locales de Euskadi, en relación con las facultades asignadas a las competencias propias según se determina en los artículos 7, 15 y 17.26 de dicho texto legal.

Las bases fundamentales del Decreto son la reafirmación del euskera como lengua de trabajo y servicio de la administración pública, condición derivada de su condición de lengua cooficial y consecuentemente el Decreto busca posibilitar la realización de las actividades administrativas en euskera con total garantía de validez jurídica, así como garantizar el derecho de la ciudadanía a relacionarse en euskera con la administración, todo ello conjugado también con el respeto tanto para la ciudadanía como para los propios miembros de las entidades locales acerca de la posibilidad de utilizar cualquiera de los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

El Decreto desarrolla una serie de instrumentos para llevar a cabo dicha política plasmados todos ellos a partir de la existencia de una planificación en la normalización lingüística del uso del euskera en las administraciones públicas, planificación que ya venía recogida aunque de una manera menos desarrollada en el Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula la normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

El Decreto regula instrumentos dirigidos al ámbito interno de la administración y al ámbito externo en cuanto a relaciones con la ciudadanía. Las mayores novedades se dan respecto al ámbito interno ya que plantea la progresiva eliminación de la traducción sistemática de todos los documentos a las dos lenguas oficiales ordenando que la documentación municipal será creada en una lengua oficial sin perjuicio de la aplicación posterior de los criterios lingüísticos relativos a las comunicaciones y notificaciones a las personas interesadas y además incorpora, respetando la autonomía de las entidades locales y dentro de un plan de uso aprobado por cada entidad, la posibilidad de imponer a los trabajadores que hayan acreditado determinados perfiles lingüísticos la utilización del euskera en su actividad laboral. Clarifica también la exigibilidad del euskera cuando los servicios y prestaciones municipales se realicen a través de un contratista adjudicatario de dichos servicios o prestaciones trasladándole los criterios lingüísticos de aplicación da la propia entidad contratante.

En cuanto a las novedades que el Decreto aporta en relación a la ciudadanía, lo más llamativo es la implantación de la evaluación de impacto lingüístico de planes y proyectos. En esta cuestión el Decreto acoge una técnica ya conocida dentro de los procedimientos con incidencia medio ambiental generando una serie de documentos que se tienen que incorporar a determinados expedientes administrativos, con la particularidad de que se asigna a la administración, en lugar de al promotor, la realización de los informes necesarios para la evaluación del impacto lingüístico. Con la evaluación del impacto lingüístico de planes y proyectos lo que busca el Decreto es que a la hora de adoptar por parte de las entidades incluidas en su ámbito de aplicación acuerdos relativos a unos concretos planes y proyectos se valore la incidencia que estos pudieran tener en la situación sociolingüística buscando incorporar las medidas necesarias para que no afecten negativamente a la situación sociolingüística del municipio. Para ello el Decreto recoge un detallado procedimiento en su capítulo VI, antes comentado, y que tiene como consecuencia que al menos son necesarios tres meses para concluir el

informe de evaluación del impacto lingüístico, cuando este es necesario, informe que tiene carácter de preceptivo y que debe de incorporarse previamente a que concluya el procedimiento administrativo sustantivo de aprobación del plan o proyecto. Además, los municipios tienen que hacer pública la metodología que emplearán para la evaluación del impacto lingüístico de los planes y proyectos pudiendo adherirse a la aprobada por el Gobierno Vasco o crear una propia que aprueben y publiquen en el portal web correspondiente.

Estas evaluaciones del impacto lingüístico están limitadas en el Decreto a una serie de planes y proyectos. Los planes a los que les es de aplicación son los relativos al planeamiento general de ordenación urbana y al planeamiento de desarrollo concretamente planes parciales y planes especiales, y los proyectos a los que se refieren son los proyectos de construcción de grandes superficies comerciales y los proyectos de construcción de polígonos industriales y parques tecnológicos. Si el Decreto se limitara a implantar la evaluación del impacto lingüístico exclusivamente a estos planes y proyectos la incidencia en la actividad administrativa sería limitada pero incorpora también que hay que evaluar todos los planes y proyectos que puedan afectar al uso del euskera dentro de los espacios vitales o “arnasguneak” que vienen definidos en el Decreto como zonas geográficas o sociofuncionales en las que el porcentaje de personas con conocimiento del euskera supera el 80%, siendo lengua de uso normal y general en las relaciones sociales. Con esta definición que tiene un ámbito geográfico y otro funcional, en determinados municipios y ámbitos sociofuncionales la incidencia del Decreto puede ser importante, sobre todo si se define como proyecto cualquier actuación que consista en la ejecución o explotación de una obra, una construcción o instalación que pueda afectar la situación sociolingüística de los municipios.

El Decreto recoge como preceptivo el informe de evaluación de impacto lingüístico, pero nada dispone acerca de qué efectos jurídicos tiene que por parte del departamento correspondiente del Gobierno Vasco no se emita en plazo su informe por lo que estimo que será de aplicación lo dispuesto con carácter general en la ley 39/2015, en concreto en su art. 80.4 que posibilita proseguir las actuaciones en el procedimiento. Estos plazos para

la emisión del informe de evaluación de impacto lingüístico pueden generar retrasos por ser mayores que los plazos previstos a la tramitación de los instrumentos de planeamiento de desarrollo urbanístico como planes parciales o planes especiales y también en la aprobación de proyectos como objeto de dicha evaluación.

El Decreto 179/2019 estudiado ha entrado en vigor el día 23 de noviembre de 2019 e incorpora unos nuevos requisitos en el funcionamiento administrativo de las entidades locales a los que hay que hacer frente dotándose los municipios de los correspondientes planes de normalización y demás instrumentos de desarrollo de los mismos tanto en las ordenanzas “ad extra” como en los reglamentos “ad intra” y resoluciones de funcionamiento interno a la vez que supone una asignación de nuevas actuaciones a realizar a los servicios técnicos municipales de euskera que el ayuntamiento deberá realizar por medios propios o ajenos y exige también una implementación cada vez mayor de programas informáticos bilingües para ir avanzando en la utilización del euskera como lengua de trabajo.

Finalmente es preciso indicar que el Decreto clarifica jurídicamente el alcance de la competencia que sobre la normalización del uso del euskera se asigna como propia a las entidades locales en la Ley de Instituciones Locales de Euskadi y dota de seguridad jurídica la utilización del euskera como lengua de trabajo y del procedimiento, resolviendo una demanda existente por parte de las entidades locales.

Ignacio Javier Etxebarria Etxeita

Secretario General del Ayuntamiento de Getxo